

Los tres campus, en contra de implantar Magisterio en la Universidad San Jorge

La protesta más numerosa fue la de Teruel, donde se manifestaron más de 4.000 personas. En Zaragoza y Huesca hubo concentraciones

ZARAGOZA. Profesores, alumnos y representantes sindicales de los campus de Huesca, Zaragoza y muy especialmente de Teruel secundaron ayer diversas movilizaciones contra la decisión del Gobierno de Aragón de autorizar la implantación de los grados de Educación Infantil y Primaria en la Universidad privada San Jorge.

Los teruelenses salieron ayer masivamente a la calle para participar en una de las manifestaciones más numerosas de las que se recuerdan en los últimos años en la ciudad. Más de cuatro mil personas asistieron a esta movilización convocada en tiempo récord por una plataforma integrada por 26 colectivos sociales, empresariales, educativos y partidos políticos.

La duplicidad de los estudios de Magisterio en la Universidad San Jorge de Zaragoza ha llenado de indignación a toda la población que, sin distinción de ideología, se ha unido en un frente común para pedir al Gobierno de Aragón que revoque la autorización de impartir esta titulación en la universidad privada por considerarla un perjuicio para Teruel.

La vicerrectora del campus terulense, Alexia Sanz, se mostraba optimista con la respuesta de ayer. «La cuestión universitaria es de interés general, y en Teruel todavía lo es más por el mayor peso que la Universidad tiene en la sociedad», razonó la vicerrectora, quien agregó que el enfado se ha multiplicado, además, por la decisión «poco consensuada» del Gobierno de Aragón.

El alcalde de Teruel, el popular Manuel Blasco, que también parti-

cipó en la manifestación, justificó su postura asegurando que va a apoyar el futuro del campus «a ultranza, con uñas y dientes». Y reclamó de la Universidad San Jorge y de la ciudad de Zaragoza «más solidaridad con los teruelenses y con sus estudios universitarios».

En Huesca hubo una concentración convocada a las puertas de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación a la que asistieron cerca de 200 representantes institucionales, políticos, profesores y alumnos. «Nosotros hemos percibido defectos formales, que en principio son los que vamos a alegar», aseguró ayer el vicerrector del campus de Huesca, José Domingo Dueñas. Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Ana Alós (PP), aseguró que se iba a pedir un informe legal y «si los servicios jurídicos nos dicen que tenemos capacidad para recurrir esa decisión, lógicamente, lo haremos». Alós también participó en la concentración y comentó que «es una decisión del Gobierno de Aragón que se puede echar atrás». Por su parte, la decana de la facultad oscense, Marta Liesa, leyó el manifiesto en el que insistió en que la duplicidad de las titulaciones «perjudicará gravemente» a los estudios, al campus y a la ciudad.

Similares argumentos se escucharon en Zaragoza, donde decenas de alumnos, profesores y sindicatos de la pública se concentraron ante la sede de la Facultad de Educación. El decano de esta facultad, Enrique García, opinó en declaraciones a los medios de comunicación que la autorización



Más de 4.000 personas recorrieron la ciudad de Teruel en defensa del campus. JORGE ESCUDERO



Un momento de la protesta realizada en Huesca. RAFAEL GOBANTES



Estudiantes y profesores se concentraron en Zaragoza. JAVIER ROJAS

de Magisterio a la USJ «no es una decisión adecuada» porque «no añade nada nuevo que no se esté ofertando en las tres provincias» aragonesas. Además, en opinión del decano, implicará «no aprovechar suficientemente los recursos» que se tienen puesto que tanto en la capital aragonesa, como en los campus públicos de Huesca y Teruel se están ofertando un número de plazas «más que suficientes».

Opinión de la USJ

Estas protestas fueron contestadas desde la Universidad San Jorge, que lamentó «que haya personas en Huesca y en Teruel que perciban los grados de educación de la USJ como un ataque o una amenaza para sus respectivos campus, lo que en absoluto se corresponde con la realidad». «Como universidad privada, que no recibe ninguna financiación pública para desarrollar su actividad, la Universidad San Jorge defiende su derecho a configurar su oferta formativa sin que esté supeditada a la oferta de otra universidad. Lo ilegal hubiera sido prohibir la implantación de unos grados que han seguido escrupulosamente todos los requisitos legales en su proceso de autorización», afirmó el rector, Carlos Pérez Caseiras.

L. F./B. T/E. P.

La Universidad de Zaragoza lleva a los tribunales a la DGA

La institución académica reclama 51,5 millones al Gobierno autonómico por el pacto de financiación firmado en 2011 con el anterior Ejecutivo e incumplido por el actual

ZARAGOZA. La Universidad de Zaragoza presentó ayer en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) un recurso por el que reclama al Gobierno autonómico el pago de 51,5 millones de euros que, según la demandante, le adeuda la DGA.

Esta medida ya había sido anun-

ciada por la Universidad tras presentar un requerimiento a la Administración en noviembre de 2014 y que el Ejecutivo se negara a reconocer y pagar esta cuantía.

El enfrentamiento institucional deriva del pacto de financiación firmado en marzo de 2011 entre la Universidad de Zaragoza y el anterior Ejecutivo (PSOE-PAR). Este acuerdo, que debía garantizar la financiación de la Universidad, fue incumplido por el actual equipo de gobierno PP-PAR.

El convenio en cuestión planteaba aumentar paulatina y anualmente los recursos que la Administración transfiere a la Universidad a razón de 9.790.000 euros en 2012, 13 millones más en 2013, y 14,8 millones en 2014, además de



15,3 millones para la implantación de nuevas titulaciones. En total, 53 millones que era la cuantía que la Universidad reclamaba en principio al Ejecutivo. Posteriormente, y después de que las Cortes de Aragón enmendaran los Presupuestos de la Comunidad para

2015 aumentando en 1,5 millones la partida prevista para la Universidad, la demanda se rebajó hasta los 51,5 millones.

Discrepancias

Contestando al requerimiento de la Universidad, el Gobierno argumentó en su momento que en el mencionado pacto había una cláusula que supeditaba el cumplimiento del acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Desde la Universidad de Zaragoza siempre se ha defendido que el acuerdo de financiación de 2011 preveía un aumento progresivo del importe dedicado a la institución académica entre 2012 y 2015 y que este era vinculante.

A lo largo de estos años, el Eje-

cutivo y la Universidad han mantenido contactos periódicos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo, aunque las negociaciones se interrumpieron el verano pasado.

La ruptura se produjo después de que la Universidad tuviera conocimiento de que los Presupuestos de Aragón para 2015 contemplaban una nueva congelación de la financiación básica y que no habría dinero para infraestructuras. Fue entonces cuando la Universidad planteó el requerimiento y ante la negativa de la DGA a satisfacer la cuantía demandada anunció el recurso contencioso administrativo que, finalmente, fue presentado ayer.

HERALDO